

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310501920200009601
Proceso:	Ordinario
Demandante:	MARIA MARGARITA DEL PILAR BAQUERO ALVAREZ
Demandado:	PORVENIR S.A., COLPENSIONES
M. P.	MARIA PATRICIA YEPES GARCIA SL TSM
Fecha de fallo:	20/10/2022
Decisión:	CONFIRMA, MODIFICA Y ADICIONA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 24/10/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)

DEMANDANTE	MARÍA MARGARITA DEL PILAR BAQUERO ÁLVAREZ
DEMANDADAS	COLPENSIONES y PORVENIR S.A.
ORIGEN	Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	05001-31-05-019-2020-00096-01
TEMAS	Ineficacia de traslado de régimen pensional
CONOCIMIENTO	Consulta y apelación
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha señalada, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art. 13 de la Ley 2213 de 2022 profiere sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por MARÍA MARGARITA DEL PILAR BAQUERO ÁLVAREZ contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, y PORVENIR S.A.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda¹

La señora María Margarita del Pilar Baquero Álvarez formula demanda contra Colpensiones y Porvenir S.A., pretendiendo se declare: **i)** la nulidad o ineficacia del traslado efectuado del RPM al RAIS administrado por Porvenir S.A., y que su afiliación al RPM se mantuvo incólume, es decir, que persiste sin solución de continuidad, como si nunca se hubiera trasladado. En consecuencia, de lo anterior se condene a **ii)** Porvenir S.A. a devolver a Colpensiones el 100% de todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la demandante, como cotizaciones, bonos o títulos pensionales, aportes al fondo de solidaridad, sumas adicionales de la aseguradora, es decir comisión por administración, los rendimientos financieros, los aportes al Fondo de garantía de Pensión Mínima, gastos de administración, la prima de reaseguro de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, con todos sus frutos e intereses como lo disponen el artículo 1746 del Código Civil y el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 modificado

¹ Carpeta 01Primera Instancia; Archivo 01ExpedienteDigitalizado.pdf, Págs. 2/7

por el artículo 7 de la Ley 797 de 2003, esto es, con los rendimientos que se hubieren causado y en general cualquier otro concepto que se halle en la cuenta de ahorro individual de la afiliada y a asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, de conformidad con lo previsto por el artículo 963 de la misma normatividad civil y a **iii)** Colpensiones a recibir nuevamente a la demandante, en calidad de afiliada a dicha administradora de pensiones y sin solución de continuidad, además de recibir todas los aportes que le sean trasladados por Porvenir S.A.; **iv)** Costas y agencias en derecho a cargo de las demandadas.

Fundamentó sus pretensiones en que nació el 11 de julio de 1959 e inició cotizaciones ante el Sistema General de Pensiones a través del RPM en marzo de 1983 hasta el mes marzo de 1995, fecha en la cual se trasladó al RAIS a través de Porvenir S.A., sin que en la antesala de la afiliación, ni con posterioridad a la suscripción de dicho acto, la AFP hubiese realizado un estudio individualizado y concreto sobre las ventajas y desventajas, de esa afiliación, incumpliendo el deber de diligencia que impone su responsabilidad profesional derivada de la prestación de un servicio público esencial que tiene como fuente un derecho fundamental irrenunciable como es la seguridad social.

En virtud de una proyección pensional en el RAIS, pudo evidenciar que su pensión de dicho régimen sería de \$1.197.100.

El 04 de diciembre 2020, elevó reclamación administrativa ante Colpensiones, solicitando que se considerara que siempre ha estado vinculada jurídicamente en el RPM y que se reciban la integridad de los aportes completos cotizados a Porvenir S.A., incluyendo los rendimientos que se hubieren causado.

Oposición a las pretensiones de la demanda

Quienes conforman la pasiva, se opusieron a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, así:

i) Colpensiones²

Afirma que no existe vicio en el consentimiento alguno, ni menoscabo a derechos fundamentales pues era del interés del afiliado, captar una prestación económica a menor edad de la exigida en el RPM, además, de beneficiarse de las características propias del RAIS. Excepcionó: prescripción, imposibilidad del traslado, inexistencia de vicio en el consentimiento, imposibilidad de condena en costas, compensación, devolución de cuotas de administración y la que llamó “genérica”.

ii) Porvenir S.A.³

El traslado del RPM al RAIS a través de Porvenir S.A., efectuado en el año 1995 producto de una decisión libre e informada, después de que la demandante fuera ampliamente asesorada sobre las implicaciones de su decisión y de que le fueran indicadas sus

² Carpeta 01PrimerInstancia; Archivo 01ExpedienteDigitalizado.pdf, Págs. 105/113

³ Carpeta 01PrimerInstancia; Archivo 06ContestaciónDemandaPorvenir.pdf

condiciones pensionales y el funcionamiento del RAIS, como se aprecia en la solicitud de vinculación en el que se observa la declaración escrita a que se refiere el artículo 114 de la Ley 100 de 1993; documento que se presume autentico en los términos de los artículos 243 y 244 del CGP y el parágrafo del artículo 54 A del CPT; así mismo, su permanencia en el RAIS por más de 26 años, sin mostrar ninguna inconformidad, y solo después de presentar una solicitud que le ha sido negada, alega una supuesta nulidad de la decisión que tomó en el año 1995, da cuenta que no existen vicios en el consentimiento que puedan probar la nulidad que afirma la parte demandante que se ha presentado en el traslado al RAIS. Finalmente, precisa que a la demandante le aplica la restricción contenida en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

Excepcionó: prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, compensación la que llamó “genérica”.

Sentencia de primera instancia⁴

El 11 de marzo de 2022, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia declarando la ineficacia del traslado que realizó la demandante hacia al RAIS y consecuentemente, que, para efectos pensionales, la actora estuvo afiliada al RPM. Ordenó a Colpensiones aceptar el regreso o vinculación de la accionante a esta entidad y a Porvenir S.A. trasladar los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la demandante, como cotizaciones obligatorias, gastos de administración y comisiones, sin incluir los valores destinados a pago de seguros previsionales con destino a Colpensiones y a esta a ultima a recibirlos para que su equivalente en semanas se refleje en la historia laboral. Condenó en costas a Porvenir S.A., fijando agencias en derecho en la suma de \$1.000.000 en favor de la demandante.

Para fundamentar lo decidido, el juez de primera instancia acudió al precedente judicial vigente en la materia y señaló que, a Porvenir S.A. le correspondía demostrar el cumplimiento de su deber de información en forma eficiente, eficaz, completa, oportuna y comprensible sobre el régimen de ahorro individual con solidaridad antes de la suscripción del formulario de afiliación a la demandante, carga probatoria que no satisfizo con el interrogatorio de parte, ni con los documentos aportados al proceso, declarando en consecuencia la ineficacia de traslado de régimen pensional.

Recurso de apelación:

i) Porvenir S.A. Inconforme con lo decidido solicita se revoque la decisión de primera instancia, argumentando que para la época de suscripción del formulario de afiliación la información se brindaba de manera verbal, sin que se tuviera la obligación de dejar algún soporte documental diferente a dicho formulario, el cual es un documento público que se presume autentico, que no fue tachado ni objetado por la demandante; razón por la cual, el elemento de prueba idóneo era el interrogatorio de parte practicado dentro del proceso, el cual considera no fue lo suficientemente valorado por el fallador de instancia, toda vez

⁴ Carpeta01PrimeraInstancia; archivo 16ActaPrimeraTramiteFallo.pdf

que en el mismo se logra evidenciar que a la demandante si se le brindó información con relación a su afiliación al RAIS. Adicionalmente, en caso de que se confirme la decisión solicita se absuelva a Porvenir S.A. de devolver lo descontado por cuotas de administración, en virtud a que dicho descuento se realiza como consecuencia a la buena administración del capital de la actora, y en tal sentido ordenar el traslado de tales comisiones genera un enriquecimiento sin causa en favor de Colpensiones, por recibir una comisión que no está destinada a financiar la pensión de vejez; toda vez que el descuento del 3% de la cotización esta destinado a financiar la comisión de administración, pensión de invalidez y de sobreviviente, siéndole aplicable el fenómeno prescriptivo al ser un concepto de tracto sucesivo.

ii) Colpensiones. Depreca se ordene a Porvenir S.A. a trasladar junto con los dineros por gastos adicionales de sumas de la aseguradora, los que fueron descontados para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, toda vez que lo que se busca con la devolución de estos aportes es salvaguardar desde el punto de vista financiero a Colpensiones.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

Solo Porvenir S.A. y Colpensiones, presentaron oportunamente el traslado otorgado para alegar en esta sede, así:

Porvenir S.A. ⁵, Solicita revocar en su integridad la sentencia de primera instancia, alegando que no se acreditó la existencia de vicio alguno en el consentimiento, toda vez que no se alegó ni se probó ninguna de las causales previstas en el artículo 1741 del código civil, y en consecuencia tal acto de traslado es eficaz. De otro lado, tampoco es posible alegar la ineficacia del traslado que determina el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, pues este establece que la persona natural o jurídica que atente contra la libre elección del afiliado se hará acreedora de una multa administrativa impuesta por el Ministerio de Trabajo, quedando sin efectos la afiliación; supuesto que no se aproxima a lo establecido en los artículo 1740 y siguientes del Código Civil, por lo que no es posible aplicar diferentes normas para resolver un asunto en concreto, dado el principio de inescindibilidad de las normas.

Aduce Porvenir S.A que garantizó el derecho de retracto a la demandante, conducta que se prueba con la publicación realizada en el diario El Tiempo el 14 de enero de 2004, y que aportó los documentos necesarios para demostrar el cumplimiento del deber de información, con lo cual considera que debe darse por satisfecha la carga procesal impuesta.

En el hipotético evento de considerar que el negocio jurídico tuvo plena validez, no puede olvidarse que, de conformidad con el literal B del artículo 113 de la Ley 100 de 1993, los dineros que se deben trasladar cuando existe cambio de régimen son: el saldo de la cuenta de ahorro individual y los rendimientos, por cuanto ningún otro valor está destinado a financiar la prestación del afiliado; De manera que condenar a pagar valores adicionales configuraría un enriquecimiento sin causa en favor de Colpensiones, situación que además

⁵ Carpeta 02SegundaInstancia; archivo 03AlegatosPorvenir1920200096.pdf

fue reiterada por la Superintendencia Financiera de Colombia en concepto de radicación No. 20191522169-003-000 del 17 de enero de 2020.

Por su parte **Colpensiones**⁶, deprecia se revise la sentencia de primera instancia, toda vez que una sentencia favorable a los intereses del demandante viola directamente la Constitución Política y además desconoce el principio de sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, consagrado en el artículo 48 de la Carta Política, el cual fue adicionado por el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, en virtud a que la declaración injustificada de la ineficacia del traslado pone en peligro el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados, pues este tipo de decisiones tienen un gran impacto fiscal, lo cual se podría traducir en la descapitalización del régimen de prima media, pues personas que no contribuyeron a su formación, vienen a último momento a beneficiarse de un ahorro comunitario, accediendo a una pensión, cuyo pago desfinancia el sistema. Por otro lado, la Administradora igualmente debe devolver al sistema la totalidad de los valores que haya recibido debido a la afiliación; en tanto al haber sido una conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, además también deberá trasladar las sumas que hayan sido destinadas al pago de los seguros previsionales.

II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de la Sala está dada por los artículos 66, 66A del CPTSS, respecto de los puntos objeto de apelación. Igualmente se surte el grado jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones conforme al artículo 69 del CPTSS modificado por la Ley 1149 de 2007, y en acatamiento de la decisión de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en sentencia de radicado 7382 de 2015.

Examinados los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por las demandadas, y los argumentos de la decisión de primera instancia, interpreta la Sala, que el **problema jurídico** a resolver se circunscribe a determinar: **a)** la viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS; de ser procedente dicha declaratoria, se precisarán, **b)** las consecuencias de dicha declaración, como el que su afiliación al RPM se considere sin solución de continuidad, así como lo concerniente a los conceptos que deben trasladarse desde la AFP del RAIS hacia Colpensiones.

Lo anterior, dado que el fundamento fáctico de las pretensiones de la demanda es el incumplimiento del deber legal de información por parte de las administradoras, lo que al tenor del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, ocasionaría no la nulidad, si no la ineficacia del acto jurídico.

⁶ Carpeta 02SegundaInstancia; archivo 04AlegatosPorvenir1920200096.pdf

Hechos relevantes acreditados documentalmente

María Margarita del Pilar Baquero Álvarez nació el 11 de julio 1959⁷. Inicialmente se afilió al extinto ISS el 04 de marzo de 1983⁸. El 03 de enero de 1995 suscribió traslado con destino a Porvenir S. A.⁹. Para el 12 de octubre de 2021 contaba con 1.550 semanas cotizadas en toda su vida laboral, de las cuales 227 lo fueron ante Colpensiones¹⁰. El 04 de diciembre de 2019 radicó ante Colpensiones¹¹ derecho de petición solicitando, entre otros, la nulidad de su traslado al RAIS, petición que fue negada señalando que su traslado se realizó voluntariamente y en ejercicio de su derecho a la libre elección de régimen¹², y por encontrarse dentro de la prohibición legal de ello al estar a diez años de cumplir la edad pensional.

a) Viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS.

Con la finalidad de determinar la eficacia o ineficacia de la afiliación al RAIS por parte de la demandante, es menester acudir a los siguientes preceptos normativos que regulan la materia:

i) Los artículos 48, 53, 335¹³ y demás normas concordantes de la Constitución Política; ii) La Ley 100 de 1993 en sus artículos 1¹⁴, 3, 4, 10, 12, 13 literal b, Inciso 3º del Literal c) del artículo 60, 90, 97, 271; iii) Artículo 4 y demás normas concordantes del Decreto 656 de 1994¹⁵; iv) Decreto 692 de 1994; v) El Decreto 663 de 1993, cuyo artículo 72 en su literal f) adicionado por el art. 12 de la Ley 795 de 2003, contiene prohibiciones expresas¹⁶ para las entidades del sector financiero entre ellas las AFP; y vi) los arts. 4, 10, 12 y demás concordantes del Decreto 720 de 1994¹⁷.

⁷ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 01ExpedienteDigitalizado.pdf, Págs. 14/16

⁸ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 01ExpedienteDigitalizado.pdf, Pág. 20

⁹ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 01ExpedienteDigitalizado.pdf, Pág.18 y 06ContestaciónDemandaPorvenir.pdf, Pág. 85

¹⁰ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 06ContestaciónDemandaPorvenir.pdf, Pág. 90

¹¹ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 01ExpedienteDigitalizado.pdf, Págs. 77/78

¹² Carpeta01PrimerInstancia; archivo 01ExpedienteDigitalizado.pdf, Págs. 79/ 81 y 02Expediente AdministrativoColp.pdf, Págs. 6/8

¹³ Las actividades que desarrollan las AFP al tenor del **artículo 335 de la CN.**, son de interés público y su ejercicio está reglamentado por la ley, debido a la función que desempeñan.

¹⁴ Consagró el artículo primero de esa ley 100, como objeto del aludido sistema: *garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad “para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afectan.”*

¹⁵ Conforme al **artículo 4** y demás normas concordantes del **Decreto 656 de 1994**, las administradoras se sitúan en el ámbito de la **responsabilidad profesional**, que **las obliga a prestar de manera eficiente, eficaz y oportuna los servicios** inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, considerados idóneos por sus conocimientos técnicos especializados y experiencia en compleja materia financiera, para garantizar derechos de sus asegurados; tal responsabilidad se mide con mayor rigor que el utilizado frente a las obligaciones entre particulares, en razón a la delegación del servicio público de seguridad social en pensiones que asumen en el RAIS, sostiene la SCL de la H. Corte Suprema

¹⁶ **Se les prohíbe: “No suministrar la información razonable o adecuada que a juicio de la Superintendencia Bancaria deba entregarse al público, a los usuarios o a los clientes de las entidades vigiladas para que éstos puedan tomar decisiones debidamente informadas y puedan conocer cabalmente el alcance de sus derechos y obligaciones en las relaciones contractuales que los vinculan o puedan llegar a vincular con aquellas”.**

¹⁷ Norma reglamentaria de los arts. 105 y parcialmente del 287 de la ley 100 de 1993 en cuanto al régimen de promoción y de responsabilidad de las sociedades AFP. disponiendo en el inciso final del artículo 4: QUE LAS ACTUACIONES DE LOS VENDEDORES EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD OBLIGAN A LAS AFP , respecto de la cual se hubiere promovido la respectiva vinculación, es decir, comprometen la responsabilidad de

Adicionalmente es pertinente hacer un breve recuento de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, que estructura el tema, y está contenida en las sentencias 31314 y 31989 de 2008; 33083 de 2011; 12136 y 46292 de 2014; SL9519 de 2015; 47125, SL19447 y SL17595 de 2017; SL3496 y SL4989 de 2018; SL1421, SL1452, SL1688, SL4360 y SL4426 de 2019; STL 3716, STL4001, STL4084, SL2877, SL4811 de 2020, y SL1217, SL782 de 2021, basada en la necesidad de determinar si en cada asunto concreto, la AFP receptora de la afiliación satisfizo tanto para ese momento, como durante la vigencia de la relación con quien demanda la ineficacia, la obligación consagrada en el numeral 1.º del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, aplicable a las AFP desde su creación, de *“suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen”*. No pudiéndose predicar como sostiene la pasiva, ni la Superintendencia Financiera que, la existencia del deber de asesoría, solo se originó desde la expedición de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

Advierte esa alta Corporación de Justicia sobre la necesidad de que la decisión del traslado de Régimen esté precedida de toda información relevante que el Fondo de pensiones proporcione a quien pretenda afiliarse, la cual, debe ser suficiente, completa y clara sobre las implicaciones que le conllevaría dejar el anterior Régimen y sus posibles consecuencias futuras. Pues, conforme al Estatuto Financiero de la época en los Artículos 97 y siguientes, consagró que las administradas debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios que orientan la buena fe en las que se sancionaba la falta de información relevante.

Más adelante la Corte Suprema de Justicia precisó que son deberes de las administradoras de pensiones, los siguientes:

- (i) Brindar información en todas las etapas del proceso de afiliación, desde la antesala hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.
- (ii) La información debe ser completa y comprensible. y,
- (iii) La información debe proporcionarse con prudencia, teniendo obligación de buen consejo, que puede llevar incluso a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.

Si bien los precedentes judiciales tenidos en cuenta por esta Sala corresponden a afiliados beneficiarios del régimen de transición, las razones que sustentan la ineficacia del traslado no tienen en cuenta esa circunstancia, por ser determinante en ello, la falta de información al afiliado.

Múltiples Salas de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín han considerado que, si bien los casos concretos abordados por la H. Corte Suprema de Justicia, refieren

éstas como establece su art. 10 y precisa en el art. 12 que tales promotores deben suministrar suficiente, amplia y oportuna información a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante la vinculación, y con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.

a personas que fueron beneficiarias del régimen de transición pensional consagrado en el art. 36 de la Ley 100/93, su *ratio decidendi* aplica para quienes se afilian al Sistema Pensional por primera vez o se trasladan entre regímenes en el marco del mismo, enfatizando en la necesidad de demostrar en cada proceso si la AFP suministró, a quien una vez fuera su potencial afiliado, *información clara, completa, suficiente*, en términos de transparencia y eficiencia, a fin de poder concluirse que la decisión adoptada entonces, obedeció a un conocimiento diáfano y preciso, no sólo de lo que se hacía, sino de las consecuencias que se derivarían de la suscripción del formulario de afiliación correspondiente y que por tanto, ese acto jurídico surgió de una real manifestación de voluntad, libre, espontánea y sin presiones.

Lo anterior, tal y como reitera la CSJ en sentencias SL 1688-2019 y 373 de 2020, que radica en la AFP el deber de brindar una información oportuna y adecuada, ello, indiferentemente de si se tiene o no beneficio transicional o si se está próximo a adquirir requisitos para pensionarse, “*dado que la omisión al deber de información se predica frente a la validez o no del acto jurídico de traslado.*”

Por estas razones, lo argumentado por la pasiva en torno a que la suscripción del formulario acredita la libre, voluntaria e informada manifestación de voluntad de la afiliada al momento del traslado o que debe desatenderse la línea jurisprudencial en materia de carga probatoria en asuntos como el que nos ocupa, no constituyen razones atendibles para exonerar del cumplimiento de sus obligaciones a la Administradora, menos aún, por cuanto, en los asuntos como el presente, no se discute la capacidad jurídica de los celebrantes, ni la licitud de los traslados; se atiende es al hecho de haberse dado el traslado de régimen pensional sin que el mismo estuviese precedido de la satisfacción del cumplimiento del deber de información por parte de la administradora que captó la afiliada, quien, según sus dichos al absolver el interrogatorio de parte, escuchó del asesor que e ISS iba a terminar y que en el fondo privado tendría una mejor proyección pensional.

No son admisibles los argumentos expresados por Porvenir S.A., en cuanto a que, el traslado de régimen obedeció a una decisión espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza y cumpliendo los requisitos exigidos en la ley, y que satisfizo el deber de información en los términos exigidos para entonces, pues ello no fue acreditado, limitándose a afirmar que así había ocurrido. Tampoco pueden acogerse los argumentos sobre la realización de campañas masivas para educar al consumidor financiero y emitido comunicados de prensa informando los cambios normativos, o que el deber de información no fue obligatorio si no desde la expedición de la Circular 016 de 2016 o que la obligación del buen consejo, la doble asesoría, e incluso la de desincentivar la afiliación son obligaciones que surgieron en 2010 y 2014, puesto que desde la creación misma del régimen pensional, subyace para la AFP la obligación de ilustrar suficientemente al potencial afiliado sobre las condiciones de ambos regímenes, su funcionamiento y expectativas, de manera que cada persona adopte una decisión informada y consciente sobre su futuro pensional.

No pudiéndose aplicar tampoco, a la aquí demandante la regulación de 2010 sobre deber del consumidor financiero, por cuanto su traslado se firmó en 1995 cuando no existía esa disposición, pero en ese entonces, ya estaba vigente y se ha consolidado la que ha obligado a las AFP a brindar la información no bastando con la suscripción del formulario

de afiliación, por cuanto su uso, no exime, ni avala la omisión de los deberes impuestos por las leyes a las AFP, y por tanto, se reitera, que previo a la suscripción de ese formulario, éstas entidades deben en un acto responsable y comprometido con su función social, dar a conocer a los potenciales afiliados, todas las implicaciones del traslado, como sostuvo la Corte en **sentencia SL 4360 de 2019** Radicado 68852.

Sobre la carga dinámica de la prueba, ha de indicarse que ésta radica en cabeza de las AFP que a través de sus agentes propiciaron el traslado de régimen del asegurado, tal y como se aprecia en la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada *-la de que no recibió información-* y es la AFP a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, al hallarse en mejor posición de ilustrarlo, por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado, además, de estar facultado el fallador por el **artículo 167 del Código General del Proceso**, para distribuir la carga de la prueba a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar todo los elementos de convicción tendientes a esclarecer el objeto del litigio y en asuntos como el que hoy nos ocupa, sin duda quien debe cumplir dicha carga es la AFP del RAIS, **por ser la entidad que:** i) Maneja la carpeta con la historia de cada afiliado, así como la información que le fue brindada al momento del trascendental acto del traslado o afiliación, **y la obtenida a lo largo de la permanencia del afiliado en el fondo**, dirigida a orientarlo sobre las mejores opciones para que tome las decisiones que más le convengan; ii) Conoce y posee los datos de ubicación y preparación que recibió **el asesor** que tuvo a cargo la asesoría efectuada al afiliado y posibilitó o intervino para que éste firmara el acto jurídico de vinculación o de traslado al fondo de pensiones.

En el sublite, mediante la prueba documental arribada, se evidencia que María Margarita del Pilar Baquero Álvarez nació el 11 de julio 1959¹⁸, por lo que, al 01 de abril 1994, cuando inició vigencia el SGSSP para ella, tenía 34 años, y no alcanzaba 15 o más años de servicios y/o cotizaciones, por lo que nunca fue beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El 03 de enero de 1995 suscribió traslado con destino a Porvenir S. A.¹⁹, el cual se acusa de ineficaz. El 04 de diciembre de 2019 radicó ante Colpensiones²⁰ derecho de petición solicitando, entre otros, la nulidad de su traslado al RAIS, petición que fue despachada desfavorablemente por parte de la entidad²¹.

Igualmente fue recaudado interrogatorio a la demandante, sin que se produjera confesión de su parte, pues en torno a las condiciones presentadas durante su traslado hacia el RAIS, manifestó que se trasladó a Porvenir S.A. porque recibió una visita en su lugar de trabajo por parte de un asesor de la AFP, quien le informó que el ISS se iba a terminar y que en el fondo privado tendría una mejor proyección para su futuro pensional; además expresó que le informaron sobre los intereses que genera el bono pensional, más no le

¹⁸ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 01ExpedienteDigitalizado.pdf, Págs. 14/16

¹⁹ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 01ExpedienteDigitalizado.pdf, Pág.18 y 06ContestaciónDemandaPorvenir.pdf, Pág. 85

²⁰ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 01ExpedienteDigitalizado.pdf, Págs. 77/78

²¹ Carpeta01PrimerInstancia; archivo 01ExpedienteDigitalizado.pdf, Págs. 79/ 81 y 02Expediente AdministrativoColp.pdf, Págs. 6/8

hablaron sobre la posibilidad de realizar aportes voluntarios, ni acerca de los rendimientos que generaría su cuenta de ahorro individual, tampoco le advirtieron sobre las ventajas y desventajas de permanecer en uno u otro régimen, ni sobre las consecuencias que podría acarrear su traslado de régimen pensional. De la escasa información que la actora reconoce haber recibido de parte del promotor del fondo, no se infiere que le hubiere realizado un estudio personalizado, ni generado con transparencia el conocimiento claro, suficiente, veraz, y leal, acerca de como operan el RAIS, y el RPM, y las diferencias entre uno y otro para la generación de pensión de vejez, de modo que ella tuviera certeza acerca de la conveniencia o no de su traslado de régimen, para decidir de manera verdaderamente libre y consciente sobre la suscripción del traslado.

Porvenir S.A. no aportó elemento de convicción donde se plasme el contenido la asesoría que dice haber brindado a la señora Baquero Álvarez, en momento anterior a la suscripción del formulario de afiliación; siendo esta AFP quien se encargó de tramitar el traslado de régimen pensional, es la llamada a demostrar que ese traslado de régimen no se vio afectado en su eficacia al suministrar la información suficiente, clara, completa a la en ese entonces potencial afiliada, pero se abstuvo de hacerlo.

En este caso, la pasiva no acreditó la satisfacción de su ineludible deber legal de brindar a la hoy demandante una oportuna información adecuada, suficiente, cierta y comprensible, en términos de transparencia y eficiencia respecto de la vinculación en los dos regímenes pensionales; ni sobre los beneficios e inconvenientes que le generaría el suscribirse a un régimen o a otro, y en general, las consecuencias del tal afiliación, entre ellas, las **modalidades de la pensión, el capital necesario para acceder a la pensión de vejez de manera ordinaria, o anticipada, los componentes y variables para establecer el monto de la prestación económica en el RAIS y su comparativo en el RPM, los requisitos para heredar el capital de la cuenta de ahorro individual en caso de fallecimiento, el derecho de retracto, las implicaciones de la negociación anticipada del bono pensional, la posibilidad e incluso la necesidad de hacer cotizaciones adicionales, para obtener la prestación de vejez en el RAIS**, entre otros aspectos relevantes, **para generar en el posible afiliado, verdadero consentimiento plenamente informado y por tanto, libre y voluntario** en la selección o traslado de régimen de pensiones, y ese deber de información es exigible en cada etapa de la afiliación y ejecución del acto jurídico, como bien ha aclarado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

De ello, no hay elementos de convicción en el plenario distintos del formulario de afiliación en ésta, sobre el cual la AFP Porvenir S.A. adujo que, estando suscrito por la demandante, atribuyéndole que lo hizo de manera libre y voluntaria, no es dable restarle valor y menos desconocer este acto; sin embargo, en este sentido, las sub reglas establecidas por la Alta Corporación definen que al momento de analizar si resulta procedente declarar la ineficacia de la afiliación: **a)** no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; **b)** en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones **allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados**, en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional. conforme al **artículo 1604 del Código Civil, la prueba de la diligencia y cuidado** recae en quien debió emplearlo y, ello no se satisface solo con allegar

documentos previamente elaborados en los que la AFP del RAIS se limita a llenar espacios en blanco que suscriben las partes, sino con la evidencia real de que la información plasmada atienda las pautas para que se adopte una decisión completamente libre, y que la asesoría brindada fue suficiente para la persona. Lo cual, es acorde con lo normado en **los artículos 97 y 98 del Estatuto Financiero vigente en 1994**, referidos a la debida diligencia que debían emplear las AFP, según los cuales, no se trata sólo de completar un formato, ni adherir a una cláusula genérica, sino de haber transmitido elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, sea que estuviere o no la persona en transición.

Los considerandos de esta providencia también sustentan que los actos del demandante posteriores al traslado, como su prolongado silencio, o el sufragar aportes, fueren indicadores de su intención de pertenecer al Régimen de Ahorro Individual, debiendo recordarse el reiterado precedente de la Sala de Casación Laboral, según el cual, el debate probatorio en los asuntos de ineficacia de traslado se encamina a establecer si, con anterioridad y al momento del acto de traslado, se cumplió el tantas veces nombrado deber de información, **sin considerar los actos posteriores que el afiliado pudiese realizar, pues** la jurisprudencia del órgano de cierre en materia de seguridad social ha dilucidado de manera uniforme que, si la debida asesoría no se brinda con anterioridad y/o al momento de la materialización del traslado, al no cumplir su propósito de generar consentimiento informado para el acto de traslado, se equipara a la ausencia de información (**SL1688-2019, SL2877-2020, SL2937-2021, SL3349-2021**), y adicionalmente, esa falta de información en esta materia, no se convalida por los traslados de administradoras dentro del Régimen de Ahorro Individual (SL3199- 2021).

De ahí que, no procede adoptar el criterio aislado contenido en la providencia **SL2440-2021**²², donde una de las Salas de Descongestión de la CSJ., expuso la tesis de los llamados “actos de relacionamiento,” que valga anotar, había formulado la Sala de Casación Laboral permanente en la SL413-2018, en un proceso donde se debatía el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, y fue necesario analizar la voluntad de permanencia del afiliado en un específico régimen pensional, por cuanto no resultaba diáfano a cuál de los regímenes pertenecía, litigio notoriamente ajeno a los asuntos de ineficacia de traslado de régimen pensional.

Conforme al precedente en cita, acogido por esta Sala, el incumplimiento de las mencionadas obligaciones de información por parte de Porvenir S.A., vulneradora de la libre y voluntaria selección de régimen prevista en el literal b del Artículo 13 de la ley 100 de 1993²³ genera consecuentemente la INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN AL RAIS, como repuesta jurídica a la transgresión de ese deber legal y ello implica que, el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica, y, por tanto no produzca ningún efecto, lo cual fue precisado en **sentencia SL4360 de 2019**, concluyendo en que: “la sanción impuesta

²² por la Sala de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación Laboral

²³ **13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.** El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características:

b. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley.

en el artículo 271²⁴ de la Ley 100 de 1993 consagra una ineficacia en sentido estricto, lo que conlleva que la consecuencia allí contenida es la exclusión de todo efecto al traslado”, lo cual, da lugar a garantizar el derecho del accionante a retornar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por COLPENSIONES y a declarar que ha permanecido afiliada, sin solución de continuidad, lo que conlleva a la reactivación de su respectiva afiliación en este último régimen.

Tales motivaciones permiten **confirmar** en ese aspecto la sentencia conocida en apelación y consulta.

b) Consecuencias económicas de la declaratoria de ineficacia

Atendiendo al principio de sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, con el fin de que COLPENSIONES cuente con los recursos necesarios, y fundamentalmente se garantice la no afectación financiera del régimen de prima media, y pueda satisfacer las prestaciones que se generen a su cargo, producto de la declaratoria de ineficacia, todos los recursos recibidos con motivo de la afiliación al régimen de Ahorro Individual, deben trasladarse a la administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de las eventuales pensiones, por cuanto, tales sumas repercutirán en la conformación del derecho pensional, dado que el RPM es un fondo común al cual ingresan de forma indistinta los recursos de todos los afiliados y que a través del sistema de reparto intergeneracional se cubren las prestaciones causadas. Además de ser menester que, por efecto de la declaratoria de la ineficacia en asuntos como el abordado en este proceso, la parte beneficiada económicamente con el acto ineficaz por omisión del deber de información garantice que el patrimonio de la persona inducida a la afiliación no sufra deterioro, y pueda disfrutar de las prestaciones del RPM, como si hubiera permanecido en él, como ha dilucidado el precedente jurisprudencial de la H CSJ en SCL., que esta Sala acoge.

Bajo las referidas premisas, se **confirmarán, modificarán y adicionarán** las órdenes impartidas a **PORVENIR S.A.** desde la primera instancia, en el sentido que ésta AFP del RAIS, dentro de los **30 días siguientes a la ejecutoria** de la presente providencia, no solo debe trasladar a COLPENSIONES **la totalidad** de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros que se han generado durante todo el tiempo en que la hoy demandante figuró como afiliada al RAIS.

Sino que Porvenir S.A., también debe trasladar a la referida AFP del RPM, las cuotas de administración, el dinero con destino al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y las sumas adicionales de las aseguradoras, por ella descontadas durante el periodo de afiliación de la hoy demandante, pues no se discute la legalidad de tales descuentos, ni,

²⁴ El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud¹ en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador. El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para el control del pago de cotizaciones de los trabajadores migrantes o estacionales, con contrato a término fijo o con contrato por prestación de servicios.

si el dinero de la afiliado fue administrado adecuada y eficientemente, sino que, como consecuencia de la ineficacia del traslado inicial al RAIS, y por no haberse estudiado -previamente a la afiliación- la situación particular de la hoy demandante, y no estando demostrado cuáles fueron los argumentos esgrimidos por dicha AFP para aseverar que cumplió con los deberes de información que sostiene haberle dado, no es pertinente exonerarla de la devolución de tales conceptos, independientemente de que Colpensiones no haya administrado el dinero del afiliado, ni asumido los riesgos que esa actividad conlleva, no pudiendo discutir inexistencia de motivos para entregarlos, detrimento patrimonial, ni enriquecimiento sin causa para Colpensiones y el demandante, tampoco transgrede derechos de las demandadas, por evidenciarse la omisión de asesoría completa y previa a la migración del accionante hacia el RAIS y dentro de ese mismo régimen, pues si bien existió una administración por parte de la AFP del RAIS, además del pago de seguros, consecuencialmente a la declaratoria de ineficacia, todos los recursos deben trasladarse a Colpensiones, administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de la pensión que se genere en favor de la hoy demandante, como anteriormente se explicó.

Se rememora que, para efecto de la devolución de conceptos hacia el RPM, con anterioridad, esta Sala de Decisión disponía que, el monto trasladado no fuese inferior al valor total del aporte legal correspondiente en caso de que el afiliado hubiere permanecido en el régimen de prima media y si así fuere, la AFP asumiera el pago de la diferencia, aplicando el precedente de la Corte Constitucional plasmado en las sentencias **C 1024 de 2004**, y en las **SU 062 de 2010** y **SU 130 de 2013** sobre los casos de las personas que regresan del RAIS al RPM, **y de otro lado**, y se abstenía de ordenar que las AFP del RAIS remitieran con destino a Colpensiones, los valores correspondientes a las sumas adicionales de las aseguradoras, tema que forma parte del recurso de apelación, ante la decisión adoptada en la primera instancia que aquí se confirma, modifica y adiciona.

Pero, retomando el punto, y por las mismas razones expuestas en este acápite, considerando el precedente de la Sala de Casación Laboral²⁵ contenido en sentencias **SL 3202-2021, SL 2769-2021, SL3708-2021, SL 3710-2021- SL 3706-2021, SL 3571-2021 y SL 3709-2021**, esta Sala ha precisado que las comisiones, los gastos de administración, entre ellos los descuentos del seguros previsionales, y los porcentajes destinados a conformar el fondo de Garantía para pensión mínima, descontadas a sus asegurados por las AFP del RAIS durante el periodo de afiliación en ella, se deben trasladar debidamente **indexadas** y con cargo a sus propios recursos, aspecto en el cual, se modificará y adicionará la decisión de instancia, con el fin de **incluir también los descuentos de seguros previsionales y los porcentajes destinados a conformar el fondo de Garantía para pensión mínima** entre los conceptos a trasladar hacia Colpensiones y que se

²⁵ Esta Sala atiende el precedente judicial original de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a partir la sentencia con radicado 31989 de 2008 y dando aplicación al artículo 1746 del Código Civil, en los cuales fundamentan la *ratio decidendi* de estos procesos, donde esa Alta Corporación determinó que por efecto de la entonces denominada nulidad, hoy ineficacia, generada con ocasión del actuar negligente de las AFP del RAIS, en materia de información, éstas se encuentran obligadas a remitir a Colpensiones no sólo las cotizaciones, rendimientos, si los hubiere, cuotas o gastos de administración, lo destinado a garantía de pensión mínima sino también las sumas adicionales de la aseguradora, por tanto, se adopta en estricto sentido lo decidido por nuestro órgano de cierre en la materia, ordenando a Colfondos S.A., que traslade a Colpensiones, los valores descontados a la demandante durante el tiempo de su afiliación en ella, por concepto de aportes para la Garantía de Pensión Mínima, y con cargo a sus propios recursos, sumas adicionales de las aseguradoras, además de las comisiones de administración.

satisfagan en su valor actualizado, dado que la pérdida de poder adquisitivo de la moneda colombiana constituye un hecho notorio.

Por lo expuesto, **no** se acogerá el **Concepto del 17 de enero de 2020 emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia**, a la luz del artículo 28 del CPACA²⁶, ante consulta realizada por la Vicepresidente Jurídica de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías -ASOFONDOS-, interpretando que para determinar los recursos a trasladar con motivo de la declaratoria judicial de nulidad o ineficacia de traslado de régimen debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto 3995 de 2008²⁷, toda vez que dicha norma fue expedida para efectos de traslado en asuntos referentes a multiafiliación, situación que no corresponde a la aquí ventilada y adicionalmente, tal concepto no obliga, pues se encuentra decantado por el órgano de cierre judicial en materia laboral y de seguridad social que las comisiones, los gastos de administración, prima de seguro previsional así como porcentajes descontados destinados a conformar el fondo de Garantía para pensión mínima, deben retornar a Colpensiones como consecuencia de la ineficacia declarada.

Al momento de cumplirse esta sentencia, los conceptos deberán aparecer detallados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

En consecuencia, las órdenes impartidas a **Porvenir S.A.**, desde la primera instancia, se **confirmarán, modificarán y adicionarán** como se dijo, y se reitera, deberán cumplirse dentro de los **30 días siguientes a la ejecutoria** de la presente providencia.

El cumplimiento de tales órdenes será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con PORVENIR S.A. sin trasladar consecuencias negativas a la actora.

Se ordenará a COLPENSIONES recibir de PORVENIR S.A. los recursos correspondientes a los conceptos aludidos, y se homologarán en el régimen de prima media las semanas cotizadas por la actora durante su afiliación en el RAIS.

²⁶ “**ARTÍCULO 28. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS.** <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.”

²⁷ **Decreto 3395 de 2008** ARTÍCULO 1o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. <Artículo compilado en el artículo 2.2.2.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016> Las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplican a los afiliados al Sistema General de Pensiones que, al 31 de diciembre de 2007, se encuentren incurso en situación de múltiple vinculación entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el de Ahorro Individual con Solidaridad y señala algunas normas de traslados de afiliados, recursos e información.

A las personas que, después de un año de entrada en vigencia la Ley 797 de 2003, se trasladaron al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) faltándoles 10 años o menos para tener la edad exigida para tener derecho a la pensión en este régimen, se les aplicará lo que establecen los artículos 7o, 8o y 12 del presente decreto

III. EXCEPCIONES

En grado jurisdiccional de consulta se estudian, además, las excepciones formuladas por la pasiva, las cuales quedan implícitamente resueltas, por haberse causado lo pretendido en la demanda.

En especial, no operó la prescripción pues la ineficacia no está sometida a dicha figura, por conllevar la inexistencia del acto jurídico sobre el que recae y el reconocimiento pensional se presentó como una de las consecuencias del retorno al RPM administrado por Colpensiones, además esta Sala, acoge la postura pacífica de la H. Corte Suprema de Justicia, respecto a que las acciones judiciales tendientes a comprobar la forma en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles, como es el caso de la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales.

Para resolver **el recurso de apelación presentado por Porvenir S.A**, en cuanto a la aplicación del fenómeno extintivo sobre el 3% destinado a cuotas de administración y demás conceptos distintos a cotizaciones y rendimientos que se dispuso trasladar, debe indicarse que sobre ellos, la prescripción tampoco tiene vocación de prosperidad, pues tal y como la acción judicial tendiente a declarar la ineficacia del traslado de régimen es imprescriptible para quien todavía no se encontraba gozando de pensión de vejez, igual suerte corren los derechos que surgen como consecuencia de tal declaratoria, como aquel destinado a obtener el derecho pensional o los conceptos que se ordenó devolver al RPM.

IV. COSTAS

Costas en esta instancia a cargo de Porvenir S.A por haber resultado vencida en su recurso. Se fijan agencias en derecho en el equivalente a 1 SMLMV en 2022, y en favor de la demandante. Lo anterior a tenor de lo dispuesto en el artículo 365 del CGP.

V. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín el 11 de marzo 2021, dentro del proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por la señora **MARÍA MARGARITA DEL PILAR BAQUERO ÁLVAREZ** contra COLPENSIONES y PORVENIR S.A. **modificándola y adicionándola** en el sentido de que:

LA AFP PORVENIR S.A., Dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, debe trasladar, con destino a COLPENSIONES, la **totalidad** de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros generados durante todo el tiempo en que la demandante ha figurado como

afiliada al RAIS, así como los valores descontados a la actora por concepto de **aportes para la garantía de pensión mínima**, y con cargo a sus propios recursos PORVENIR S.A. también debe trasladar debidamente indexados a Colpensiones el valor de **comisiones de administración y primas de seguros** descontados a la referida afiliada.

El cumplimiento de lo ordenado será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con PORVENIR S.A.

Se ordena a COLPENSIONES recibir de PORVENIR S.A. los valores correspondientes a los conceptos aludidos, y homologar en el régimen de prima media las semanas cotizadas por la actora durante su afiliación en el RAIS.

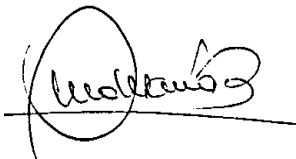
SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. Agencias en derecho en el equivalente a 1 SMLMV en 2022.

Se ordena notificar lo resuelto por edicto.

Los Magistrados,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN